

**PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES****PROYECTO DE LEY NO. 560 DE 2021 CÁMARA / 401 DE 2021 SENADO**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA PRISIÓN PERPETUA REVISABLE Y SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL (LEY 599 DE 2000), EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (LEY 906 DE 2004), EL CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO (LEY 65 DE 1993) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, LEY GILMA JIMÉNEZ."

**PROPOSICIÓN DE ARCHIVO**

**Se propone archivar el proyecto de Ley No. 560 de 2021 Cámara / 401 de 2021 Senado** "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA PRISIÓN PERPETUA REVISABLE Y SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL (LEY 599 DE 2000), EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (LEY 906 DE 2004), EL CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO (LEY 65 DE 1993) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, LEY GILMA JIMÉNEZ.", en tanto desconoce derechos y garantías constitucionales, así como tratados internacionales suscritos por Colombia.

Aunado a que actualmente cursa en la Corte Constitucional una demanda en contra del Acto Legislativo 01 de 2020. Es menester que el Congreso de la República cuente con un pronunciamiento o decisión por parte de la Honorable Corte Constitucional respecto a la constitucionalidad o no del acto legislativo que en este proyecto se pretende reglamentar, siendo un tema de profunda importancia.

**JUSTIFICACIÓN:** *En primera medida, debe afirmarse que intentar establecer la pena de cadena perpetua en Colombia, así sea revisable, es un retroceso frente a la protección de los Derechos Humanos y al Estado Social de Derecho, el cual establece su pilar fundamental en el principio de Dignidad Humana.*

*Iniciativas de esta naturaleza se encuentran ampliamente soportadas en un espíritu Populista Punitivo, el cual es uno de los grandes males que puede adolecer a un sistema penal serio y garante de derechos. Las medidas impulsadas a través del Populismo Punitivo generalmente son de recibo popular y sirven para impulsar el carisma de ciertas campañas políticas o personalidades, sin tener en consideración el contexto social, político, institucional y económico del país, mucho menos la naturaleza o el desenvolvimiento de la Doctrina Penal, en lo referente a la Política Criminal o lo pertinente a los avances y conclusiones en el estudio de la Criminología.*

*Los argumentos por medio de los cuales se trata de justificar el Proyecto se soportan en una visión antropológicamente negativa del ser humano considerando que, a grandes rasgos, la figura del "Delincuente Nato" existe, es decir, que una persona desde que nace es concebida mala, que su actuar siempre va a estar encaminado a atentar en contra de bienes jurídicos tutelados y que resultará imposible normalizar su conducta. Sobra decir que dicho pensamiento esta proscrito de la Doctrina Penal y la Criminología crítica, en razón a que este tipo de pensamientos estaban muy arraigados al racismo, clasismo y la xenofobia, como bien se pudieron establecer tras el fracaso de la Escuela Positiva Italiana.*

*Hoy por hoy, el Derecho Penal en general, nacional e internacional, propende por la humanización del proceso penal y de las penas. Es así, como a la fecha y desde la dogmática penal se encuentran las escuelas que buscan fortalecer la justicia restaurativa y las penas alternativas, así como las corrientes abolicionistas, que procuran abolir la pena de prisión en general bajo estudios que demuestran que las cárceles no aportan en absoluto hacia la reinserción de procesado y su normalización.*

*La pena a aplicar debe ser acorde con los principios y fines de la misma, así como la llamada función de la pena, es decir, buscar la prevención general y especial de una manera idónea y útil para la sociedad, más aún cuando el eje central de la función de la pena es buscar la resocialización, cosa que no se lograría con el presente Proyecto de Acto Legislativo.*

*En este orden de ideas, esta iniciativa es manifiestamente contraria a la reivindicación de los Derechos Humanos y la Dignidad Humana.*

### **PACTOS, DECLARACIONES Y CONVENCIONES INTERNACIONALES**

*Debe afirmarse que, Colombia al suscribir a distintos tratados y acuerdos internacionales se comprometió, en primera medida, a prohibir la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en segunda medida, a que sus penas serían acordes a lo dispuesto en dichos instrumentos internacionales.*

*En este sentido distintos pactos, declaraciones y convenciones reglan:*

#### **El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos**

Artículo 7

*Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.*

Artículo 10

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

(...)

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

#### **La Convención Americana sobre Derechos Humanos**

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

(...)

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

#### **Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre**

Artículo 26.

*Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.*

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas.

**La Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas frente a la tortura y a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes**

Artículo 3

Ningún Estado permitirá o tolerará tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. (...)

**La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes** (aprobada por la Ley 70 de 1986)

Artículo 16

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1.

**Ley 70 de 1986, "Por medio de la cual se aprueba la "Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", adoptada en Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984".**

Artículo 16

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1.

**La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura** (aprobada mediante la Ley 409 de 1997)

Consideraciones:

Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

**Ley 409 de 1997, Por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura", suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985.**

Consideraciones:

Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

**Las anteriores son claras en proteger y velar por quienes pueden ser víctimas de actos crueles y degradantes, como lo es la Cadena Perpetua, la cual debe ser evitada a todo costo.**

Ahora, Colombia atraviesa una crisis carcelaria sin comparación, con hacinamiento aproximado del 48% en las cárceles y del 100% en varias URIS de diferentes municipios, con un INPEC que trabaja solamente con el 48% de lo que debería ser su nómina ideal, teniendo

actualmente vinculados 15.795 trabajadores, de una planta de personal que debería oscilar entre los 22.630 trabajadores, lo cual ocasiona sobre carga laboral y sobresueldos.

Es claro que, con una reforma, como la aquí propuesta, incidirá directa y negativamente sobre el Sistema carcelario, pues se traduce en un mayor tiempo de reclusión de los condenados, que al corto y mediano plazo significa un mayor gasto para el erario.

- Un preso en Colombia le cuesta al Estado en promedio 18 millones al año.
- Un hombre en Colombia tiene una expectativa de vida de 71 años, de acuerdo a cifras arrojadas por el DANE.
- Una persona solo puede ser condenada por la justicia ordinaria desde los 18 años.
- Lo cual deja un margen aproximado de 53 años de prisión perpetua, margen que ya está contemplado en la pena máxima (60 años).
- En consecuencia, un solo condenado a cadena perpetua costaría aproximadamente 954 millones al Estado.

**DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2021  
(CADENA PERPETUA REVISABLE)**

Actualmente el Acto Legislativo 01 de 2020 “por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable” cuenta con una **demanda de Inconstitucionalidad** radicada por Gustavo Gallón Giraldo, Julián Daniel González Escallón, Juan Carlos Ospina Rendón, David Fernando Cruz Gutiérrez, Enith Carolina Bula Beleño, Iván Cepeda Castro, Roy Barreras Montealegre, Ángela María Robledo Gómez y Nataly Macana Gutiérrez bajo el **expediente D-14172 – Magistrado Sustanciador: Alejandro Linares** Cantillo, quien en **AUTO del 15 de marzo del 2021** donde resolvió **ADMITIR** la demanda presentada en relación con:

- 1) Supuesta violación del principio de Consecutividad.
- 2) Sustitución del eje definitorio de la Constitución Política, referente a la Dignidad Humana.

En donde, además, corrió traslado al Procurador General de la Nación, para que en un termino de 30 días, emita concepto (plazo se cumplió el 29 de abril), y ordenó al Congreso remitir los elementos de prueba vinculados con el trámite del proyecto.

**Los DEMANDANTES sostienen** que el Acto Legislativo 01 de 2020 es inconstitucional, con fundamento en dos cargos:

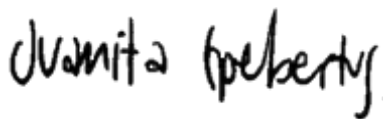
- En primer lugar, consideraron que se incumplió el trámite legislativo previsto en el artículo 375 de la Constitución, según el cual, las reformas constitucionales serán válidas si superan ocho debates en dos periodos ordinarios y consecutivos. En su concepto, si bien formalmente se llevaron a cabo los debates séptimo y octavo, lo cierto es que estos “carecieron de garantías materiales para su desarrollo, por lo que deben considerarse inexistentes”. Así, concluyeron que el acto demandado incurrió en una “(...) **violación al principio de Consecutividad**, con ocasión de la elusión material de los debates séptimo y octavo del trámite de aprobación del proyecto de reforma (...), al existir una violación al procedimiento legislativo y al principio democrático [.] por falta de garantías materiales para el ejercicio de la participación (...)”.

- En segundo lugar, alegan que el Acto Legislativo 01 de 2020 adolece de un vicio de competencia, ya que el Congreso de la República se extralimitó en el ejercicio de su poder de reforma, en tanto aprobó un acto que sustituye un pilar esencial de la Constitución. Para sustentar el cargo acudieron al test de sustitución que ha utilizado la Corte. En desarrollo del mismo, indicaron, como premisa mayor, que la dignidad humana es un eje estructural de la Constitución, que “establece límites precisos e insoslayables al ejercicio del poder punitivo en cabeza del 1 Folio 6. 2 Folio 8. Énfasis por fuera del texto original. Expediente D-14172 3 Estado [,] conforme con lo señalado en el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 28 y 93 de la Constitución”. Como premisa menor, manifestaron que la reforma introducida por el acto demandado dispone “la habilitación constitucional para que se aplique la cadena perpetua ante ciertas conductas, poniendo fin a la resocialización como finalidad de la pena en un sistema penal garantista, permitiendo que las sanciones impuestas deriven en un trato cruel e inhumano de los condenados y relativizando el principio de dignidad humana”. Finalmente, concluyeron que el Acto Legislativo 01 de 2020, al poner fin a la resocialización, sustituye el pilar fundamental de la dignidad humana.

Cordialmente,



**JUAN CARLOS LOZADA VARGAS**  
Representante a la Cámara  
Partido Liberal



**JUANITA GOEBERTUS ESTRADA**  
Representante a la Cámara  
Partido Alianza Verde

5



**ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ**  
Representante a la Cámara  
Ponente